



La consulta plantea si con motivo de la incorporación de la información cedida por la Administración General del Estado, en el marco de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a la aplicación informática con que se gestionan la mayoría de los procedimientos administrativos de la Consejería consultante, es preciso declarar los ficheros que contengan dicha información cedida, y si ésta puede utilizarse como fuente siempre que medie consentimiento de los ciudadanos. La finalidad es que dicha información pueda utilizarse de forma simultánea o sucesiva en todos los procedimientos, que a instancia de un mismo interesado, se gestionen en el plazo de tiempo correspondiente a la validez del documento que se consulta, evitando realizar consultas en paralelo por distintos órganos gestores.

El artículo 6.2.b de la Ley 11/2007 reconoce a los ciudadanos el derecho a *“no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.”*

Por su parte el artículo 9.1 de la misma Ley 11/2007 prevé en relación con las transmisiones de datos entre Administraciones públicas lo siguiente:

*“ Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.*

En aplicación de lo previsto en la Ley antes citada se firmó con fecha 3 de julio de 2007 (publicado en el B.O.E. por Resolución de 5 de julio de 2007,

de la Secretaría General para la Administración Pública) un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Administraciones públicas que permite a esta Comunidad Autónoma acceder a los servicios ofrecidos por el Ministerio de Administraciones Públicas para la verificación por vía electrónica de los datos de identidad y residencia de los ciudadanos que expresamente lo autoricen, a fin de evitar que tengan que aportar la fotocopia de documentos de identidad o el certificado de empadronamiento como documento probatorio del domicilio y residencia cuando dichos documentos obran en poder de las Administraciones.

La verificación por vía electrónica de los datos de identidad y residencia viene regulada en la ORDEN PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad y en la ORDEN PRE/4008/2006, de 27 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Residencia, en desarrollo, respectivamente, de los Reales Decretos 522/2006, de 28 de abril y 523/2006, de la misma fecha.

Señala la ORDEN PRE/3949/2006 que los objetivos de dicha norma son, por un lado, suprimir la obligación de presentar fotocopias de los documentos acreditativos de identidad en todos los trámites administrativos, pudiendo sustituirse dicha fotocopia, en aquellos supuestos donde la constancia de los datos fuese imprescindible, por una consulta telemática a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de forma directa o diferida.

En este sentido, el número primero del Reglamento técnico del Sistema de Verificación de Datos de identidad aprobado por la aludida ORDEN PRE/3949/2006, describe el sistema disponiendo que *“El Sistema de Verificación de Datos de Identidad puesto a disposición de los Departamentos y Organismos de la Administración General del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas se establece como servicio horizontal para la consulta y comprobación de los datos del Documento de Identificación del Ciudadano custodiados por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en base a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que atribuye al Cuerpo Nacional de Policía, la función de expedición del Documento Nacional de Identidad y el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. Información que se encuentra registrada y custodiada en los ficheros de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que soportan la gestión del documento nacional de identidad y la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (Sus denominaciones, conforme a las Órdenes INT/1751/2002, de 20 de junio e INT/2190/2006, de 19 de junio, son ADDNIFIL y ADEXTTRA, respectivamente).”*

Por su parte la ORDEN PRE/4008/2006 señala que los objetivos de dicha norma son, por un lado, no exigir a quien tenga la condición de interesado en los procedimientos, la aportación del certificado de empadronamiento como documento acreditativo del domicilio y residencia; y de otro, sustituir, en los procedimientos para cuya tramitación sea imprescindible acreditar de modo fehaciente los datos del domicilio y residencia del interesado, la presentación de documento acreditativo por una consulta electrónica mediante un Sistema de Verificación de Datos de Residencia puesto a disposición de los organismos de la Administración General del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas y el Instituto Nacional de Estadística dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

Igualmente el número primero del Reglamento Técnico del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, efectúa una descripción de éste conforme al cual *“El Sistema de Verificación de Datos de Residencia puesto a disposición de los Departamentos y Organismos de la Administración General del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas se establece como servicio horizontal para la consulta y comprobación de los datos sobre residencia de los ciudadanos mediante el acceso a los Padrones municipales coordinados por el Instituto Nacional de Estadística, en base a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Padrón Municipal, en la que se atribuye al Instituto Nacional de Estadística, entre otras, la función de coordinación de los distintos padrones municipales. Ésta información se encuentra registrada y custodiada en los ficheros del Instituto Nacional de Estadística registrados en la Agencia de Protección de Datos con la denominación «PADRONES MUNICIPALES», conforme a la Orden ECO/143/2002, de 10 de enero, publicada en el BOE 26, de 30 de enero de 2002.”*

Se trata, en definitiva, de dos sistemas que permiten que, en aquellos supuestos en que durante la tramitación de un procedimiento administrativo, sea preciso aportar fotocopia del DNI u otro documento acreditativo de identidad, o certificado de empadronamiento u otra acreditación de su domicilio y residencia, el interesado pueda optar a que la Administración actuante, con su expreso consentimiento, realice una verificación de dichos datos mediante una consulta a determinados ficheros de los órganos de la Administración del Estado. Debe resaltarse que se trata de ficheros creados para el ejercicio de sus específicas competencias, esto es las funciones de expedición del DNI y el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, atribuidas por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Cuerpo Nacional de Policía, y la función de coordinación de los padrones municipales que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye al Instituto Nacional de Estadística.

Desde el punto de vista de la normativa de protección de datos cabe señalar que esta comunicación de datos personales constituye una cesión de

datos de carácter personal definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, como *“Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”*.

El artículo 11.a de la Ley Orgánica 15/1999 establece que *“Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.”*, aunque establece algunas excepciones en el número segundo de dicho artículo, entre las que cabe destacar la prevista en la letra a *“Cuando la cesión esté autorizada en una ley.”*

El número primero del artículo 4 de la misma Ley Orgánica 15/1999 establece dentro de los principios de protección de datos que *“Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.”* En su número segundo dispone que *“Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.”* Debe aclararse aquí que la Audiencia Nacional partiendo de una interpretación sistemática de este precepto viene considerando la expresión “finalidades incompatibles” como sinónimo de “finalidades distintas”

Por consiguiente, los datos que han sido objeto de cesión solamente pueden utilizarse por el cesionario, en este caso la Consejería consultante, para la finalidad “determinada, explícita y legítima”, previamente conocida y autorizada por el titular del dato. Esta finalidad en el presente supuesto vendría constituida exclusivamente por la incorporación en un procedimiento, en tramitación por el órgano de la Consejería consultante competente en cada caso, de aquellos datos relativos a la identidad o residencia del interesado, mediante una comprobación en línea de dichos datos efectuada en sus ficheros por los órganos a que hacen referencia las Ordenes antes citadas que, por las competencias que tienen atribuidas, pueden realizar dicha verificación.

Este principio de finalidad regulado en la Ley Orgánica 15/1999 viene también expresamente previsto en el artículo 9.2 de la Ley 11/2007 según el cual *“La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los ciudadanos por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. El acceso a los datos de carácter personal estará, además, condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6.2.b de la presente Ley.”*

Asimismo, se hace constar el principio de finalidad en los Reglamentos técnicos de los sistemas de verificación de datos antes citados así dispone el número cuarto del Reglamento Técnico del Sistema de Verificación de Datos de Identidad que *“La consulta y el acceso a la información proporcionada por el Sistema de Verificación de Datos de Identidad deberá realizarse con una finalidad concreta, que quedará recogida en el momento de la consulta.”* Y el número quinto del Reglamento Técnico del Sistema de Verificación de Datos de Residencia señala que *“La consulta y el acceso a la información proporcionada por el Sistema de Verificación de Datos de Residencia deberá realizarse con una finalidad concreta, que quedará recogida en el momento de la consulta.”*

De todo lo expuesto resulta claro que, además de la necesidad de consentimiento del interesado para la cesión de datos mediante estos sistemas de verificación, es esencial que los datos se traten conforme a los restantes principios establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, señaladamente los principios de legitimidad y finalidad del tratamiento, principios reiterados en la Ley 11/2007 que limita la disponibilidad de los datos “a los procedimientos y actuaciones de su competencia.”

De la consulta parece desprenderse que va a crearse un nuevo fichero con la información cedida, a este respecto, debe indicarse que la creación de este fichero no resulta amparada en el ejercicio de una competencia de esa Consejería ni viene habilitado por la Ley 11/2007, que permite únicamente la utilización de los datos cedidos en el concreto procedimiento que, en el marco de sus competencias, se encuentre tramitando un órgano de esa Consejería y para el que el interesado ha consentido la cesión de sus datos; en consecuencia, ese dato cedido podrá únicamente incorporarse al fichero correspondiente y, lógicamente, ya existente del órgano que tramita el procedimiento, por lo que la creación de ese nuevo fichero resulta contraria a lo previsto en los artículos 4 de la Ley Orgánica 15/1999 y 9.2 de la Ley 11/2007. De la misma manera la utilización del dato cedido como fuente, extraído de cualquier fichero en que se encuentre dentro de la aplicación informática utilizada por la consultante, excede igualmente de las competencias de esa Consejería y resulta, asimismo, contrario a lo previsto en los artículo antes citados de la Ley 15/1999 y 11/2007.

A mayor abundamiento, la utilización de ese dato como fuente, además de ser innecesario, ya que precisamente el objetivo del Convenio firmado por el Ministerio de Administraciones Públicas y la Junta de Andalucía es poner a disposición de ésta última una aplicación que permite solicitar en cada momento por el órgano competente para la tramitación de un concreto procedimiento, la verificación en línea de determinados datos personales del interesado, puede ser contraria al principio de veracidad o exactitud de los datos recogido asimismo en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999 al



disponer “*Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.*”